

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

RESTRICTED

S/C/M/54

27 de agosto de 2001

(01-4111)

Consejo del Comercio de Servicios

INFORME DE LA REUNIÓN CELEBRADA EL 9 DE JULIO DE 2001

Nota de la Secretaría

1. El Consejo del Comercio de Servicios celebró una reunión el 9 de julio de 2001. El Consejo eligió al Embajador Jara, de Chile, como Presidente interino para las series de reuniones ordinarias y extraordinarias, dado que el Presidente del Consejo, Embajador Amorim, del Brasil, no pudo presidirlas.

2. El orden del día de la reunión figura en el documento WTO/AIR/1584. En el punto "Otros asuntos", el representante del Panamá manifestó que deseaba formular una declaración sobre las medidas discriminatorias que contenía la legislación tributaria de algunos Miembros y que afectaban de manera adversa a los servicios y a los proveedores de servicios del Panamá. El representante del Brasil dijo que quería formular una declaración relativa a la fecha propuesta para el Examen del Anexo sobre Servicios de Transporte Aéreo. El Presidente señaló que no se había incluido en el orden del día el punto, inicialmente previsto, sobre la "Cooperación entre la OACI y la OMC" al no poder asistir la OACI a la presente reunión. El tema se abordaría en la próxima reunión ordinaria del Consejo en octubre.

3. El Presidente propuso que el Consejo adoptara el orden del día según fue distribuido, añadiendo los puntos planteados en el marco de Otros asuntos.

4. Así lo acordó el Consejo.

A. EXENCIONES DE LAS OBLIGACIONES DEL ARTÍCULO II (NMF) - CUESTIONES PLANTEADAS COMO CONSECUENCIA DEL EXAMEN

5. El Presidente recordó que el Consejo había tratado de varias cuestiones sustantivas derivadas del examen de las exenciones del trato NMF en su última reunión, estimulado por las comunicaciones recibidas del Japón, Corea y Hong Kong, China (S/C/W/173) así como de Hong Kong, China (Job 7775). Una de las cuestiones inicialmente planteadas en el documento S/C/W/173 y posteriormente desarrollada en una comunicación de Chile (Job (01)/34) se refería a la cuestión de los procedimientos para la terminación, reducción o rectificación de las exenciones del trato NMF. A petición del Consejo, la Secretaría había elaborado una nota sobre esta cuestión (Job (01)/106). El Presidente sugirió tratar en primer lugar del documento conjunto del Japón, Corea y Hong Kong, China, junto con la comunicación aparte de Hong Kong, China, pues se trataba de contribuciones que planteaban algunas cuestiones sustantivas estrechamente relacionadas.

6. La representante de Hong Kong, China declaró que la formulación de los artículos XVI y XVII indicaba claramente la ilegalidad de toda exención del trato NMF que supuestamente diera al Miembro que la aplicaba el derecho a otorgar un trato menos favorable que el establecido en su lista de compromisos específicos. Apoyaban este argumento otros documentos y directrices acordados en la OMC, como se detallaba en la contribución de su delegación. La oradora animaba a los Miembros a confirmar esta posición jurídica y a llevar adelante el debate sobre la supresión de tales exenciones

del trato NMF, en armonía con los procedimientos sugeridos por Chile. Refiriéndose a un comentario del representante de la República Dominicana hecho en la reunión anterior relativa a las exenciones del trato NMF en el sector del turismo, que otorgaban un trato menos favorable que el establecido en la lista de compromisos específicos, declaró que Hong Kong, China instaría a que se suprimieran tales exenciones.

7. El representante del Japón apoyó los comentarios expuestos por Hong Kong, China, y sugirió que esta postura jurídica se reflejara en las directrices sobre exenciones del trato NMF que se acordarían en el futuro.

8. El representante de Corea apoyó las declaraciones formuladas por Hong Kong, China y el Japón.

9. En respuesta a una sugerencia de los Estados Unidos en el sentido de que las delegaciones abordaran bilateralmente este asunto con los Miembros interesados, la representante de Hong Kong, China declaró que la cuestión de las exenciones del trato NMF que otorgaban un trato menos favorable que el establecido en una lista de compromisos específicos era de importancia sistémica y por tanto debería abordarse en el Consejo.

10. El Presidente concluyó que determinadas cuestiones planteadas en el marco de este punto del orden del día habían suscitado más atención que otras. Sugirió que en la próxima reunión se abordaran sistemáticamente los puntos expuestos en los documentos a fin de llegar a entender mejor cómo abordar estas cuestiones. Pidió a las delegaciones que reflexionaran sobre cómo tratar a largo plazo estas cuestiones. Seguidamente llamó la atención de los Miembros sobre la cuestión de los procedimientos para la terminación, reducción o rectificación de las exenciones del trato NMF y sobre la nota informal acerca de los aspectos jurídicos en juego que había elaborado la Secretaría a petición de los Miembros, que figuraba en el Job (01)/106.

11. Un representante de la Secretaría declaró que la nota se ocupaba de estas tres situaciones: i) rectificación de errores técnicos en una lista de exenciones de la obligación de trato NMF; ii) terminación de las exenciones de la obligación de trato NMF; y iii) reducción del ámbito o nivel de una exención de la obligación de trato NMF. Se señaló que el AGCS no ofrecía ningún procedimiento específico que abordara estas situaciones. Por tanto, incumbía a los Miembros decidir si abordaban tal vacío de procedimiento y la manera de hacerlo. En lo concerniente a la terminación de las exenciones de la obligación de trato NMF, el Anexo sobre Exenciones de las Obligaciones del Artículo II (NMF) preveía solamente el caso en el que la exención tuviera una determinada fecha de terminación. En tales casos la exención sencillamente terminaría en la fecha especificada y el Miembro en cuestión no necesitaría tomar ninguna medida. No obstante, no se disponía nada para los casos en que la fecha de terminación no estuviera consignada en la exención ni para los casos en que un Miembro decidiera terminar una exención antes de la fecha consignada. En lo que respecta a la reducción del alcance o el nivel de una exención de la obligación de trato NMF, al parecer era necesario que los Miembros tomaran primero una decisión política acerca de si deberían permitirse tales modificaciones y, de ser así, cuál sería el procedimiento apropiado. Finalmente, el orador señaló que no habría ningún impedimento para aplicar a los tres casos el mismo procedimiento de certificación.

12. Los representantes de Chile y Corea dieron su apoyo a las conclusiones que figuraban en la nota de la Secretaría y sugirieron que se elaboraran cuanto antes los procedimientos apropiados.

13. La delegación del Japón dijo coincidir con las conclusiones expuestas en la nota de la Secretaría relativas a la terminación y rectificación de los errores técnicos y se mostró de acuerdo en que se redactara un procedimiento apropiado. La cuestión de la reducción de las exenciones de la obligación de trato NMF era más compleja y hacía falta seguir examinándola.

14. El representante de México señaló que su delegación estaba de acuerdo en principio con las conclusiones expuestas en la nota de la Secretaría pero que necesitaba seguir reflexionando acerca de las cuestiones planteadas con respecto a la terminación de las exenciones de las obligación de trato NMF.

15. Los representantes de las Comunidades Europeas y los Estados Unidos estuvieron de acuerdo sobre la necesidad de contar con procedimientos en los ámbitos de que se ocupaba la nota de la Secretaría, los cuales necesitaban examinar con mayor detalle.

16. El Presidente sugirió que el Consejo tomara nota de las declaraciones formuladas y volviera sobre este punto en la próxima reunión.

17. Así lo acordó el Consejo.

B. RECTIFICACIÓN TÉCNICA DE LA LISTA DE EXENCIONES DE LAS OBLIGACIONES DEL ARTÍCULO II

18. El Presidente llamó la atención del Consejo sobre la comunicación de la República Dominicana (S/C/W/175) relativa a una rectificación técnica de su lista de exenciones de las obligaciones del artículo II (NMF) con respecto a los servicios jurídicos. El error técnico en cuestión había existido desde la conclusión de la Ronda Uruguay. Recordó que en la última reunión los Miembros no plantearon en principio ningún problema sustantivo con respecto a la rectificación del error; no obstante, algunos Miembros habían sugerido que quizás fuera preferible elaborar los correspondientes procedimientos para las rectificaciones de las exenciones de la obligación de trato NMF en primer lugar y aplicarlos posteriormente al caso de la República Dominicana. Del debate en el marco del anterior punto del orden del día, el Presidente concluyó que el Consejo aún no estaba en condiciones de resolver esta cuestión en la presente reunión. Sugirió que este punto se omitiera del orden del día de la próxima reunión y que se tratara esta cuestión una vez que se hubiera solucionado el tema de los procedimientos para las rectificaciones de las exenciones de la obligación de trato NMF.

19. Así lo acordó el Consejo.

C. EXENCIÓN DE LAS OBLIGACIONES DEL ARTÍCULO II (NMF) EN EL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES BÁSICAS

20. El Presidente recordó que en su última reunión el Consejo examinó un "Proyecto de Decisión relativa a la exención del artículo II (NMF) en materia de telecomunicaciones básicas consignada por el Brasil en su Lista" (S/C/W/192) presentado por la delegación del Brasil. Señaló que el proyecto de decisión permitiría al Brasil mantener su exención de la obligación de trato NMF resultante de las negociaciones y consignada en su Lista anexa al Cuarto Protocolo, que cobraría efecto jurídico con la entrada en vigor de la lista de compromisos específicos del Brasil en telecomunicaciones básicas. Paralelamente el Brasil había iniciado un procedimiento de certificación de su lista de compromisos en telecomunicaciones básicas (S/C/W/191). Antes del plazo de 45 días para la presentación de objeciones, las delegaciones de los Estados Unidos (S/L/94), Hong Kong, China (S/L/95), las Comunidades Europeas y sus Estados miembros (S/L/96), así como el Japón (S/L/97) notificaron sus objeciones al proyecto de lista de compromisos en telecomunicaciones básicas.

21. El representante de Brasil recordó que su país había decidido unilateralmente (al no tener ninguna obligación jurídica) presentar una nueva oferta en telecomunicaciones básicas. Señaló que desde que se distribuyó la lista para su certificación, cuatro Miembros habían presentado objeciones a la misma. La principal argumentación de dichas objeciones consistía en que la prerrogativa del Poder Ejecutivo de establecer límites en relación con la participación extranjera en la composición de capital

de los proveedores de servicios de telecomunicaciones equivalía a dejar sin consolidar los compromisos del modo 3 que figuraban en la lista. Su delegación no estaba de acuerdo con tal evaluación y reiteraba que con la oferta se había tratado de afianzar un alto nivel de liberalización para todos los servicios incluidos en la lista modelo de telecomunicaciones básicas elaborada en las negociaciones del Cuarto Protocolo. Además, el Brasil también había mostrado su disposición a adoptar el documento de referencia sobre telecomunicaciones básicas.

22. No obstante, a pesar de las consultas celebradas en todas las fases del proceso, a su delegación le decepcionaba que no hubiera sido posible alcanzar una solución mutuamente satisfactoria con los socios comerciales del Brasil, dado que sus exigencias excedían lo que podría haber sido aceptable incluso en el contexto de negociaciones, cuanto más en una oferta unilateral. Por consiguiente, a su delegación no le quedaba más remedio que retirar el proyecto de lista de compromisos específicos en telecomunicaciones básicas. El orador solicitó que se retirara del orden del día del Consejo el punto relativo al proyecto de decisión sobre la exención de la obligación de trato NMF.

23. El representante del Brasil recalcó las importantes medidas que había tomado su país en la liberalización de su sector de telecomunicaciones, abriendo a todos los proveedores extranjeros la posibilidad de establecerse en el mercado dentro de un régimen reglamentario basado en los principios de la transparencia, la no discriminación y la competencia, garantizando así los intereses de los consumidores, de las empresas extranjeras y del conjunto de la sociedad civil brasileña. El Brasil se mantiene comprometido con esos principios, estando dispuesto a reanudar las conversaciones en el contexto de las negociaciones objeto de mandato sobre servicios.

24. Los representantes de las Comunidades Europeas, los Estados Unidos, Hong Kong, China, Japón, y Corea, aunque saludaron los esfuerzos del Brasil, que contenían muchos elementos positivos, declararon que la limitación horizontal en el marco del modo 3 afectaría a la certidumbre jurídica y la previsibilidad de los compromisos contraídos en la Lista. Los representantes esperaron continuar las conversaciones con la delegación del Brasil.

25. El representante del Brasil reiteró que su delegación seguía estando dispuesta a reanudar las conversaciones sobre esta cuestión en el contexto de las negociaciones objeto de mandato sobre servicios.

26. El Consejo tomó nota de la declaración del Brasil en el sentido de que retiraría su proyecto de lista de compromisos específicos en telecomunicaciones básicas y de las demás declaraciones formuladas.

D. EXAMEN DEL ENTENDIMIENTO RELATIVO A LAS TASAS DE DISTRIBUCIÓN EN EL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES

27. El Presidente llamó la atención del Consejo sobre una propuesta de Australia relativa al mandato para el examen de las tasas de distribución de telecomunicaciones (Job (01)/73) planteada por Australia.

28. El representante de Australia declaró que el objetivo de su delegación era que el funcionamiento de todos los sistemas de telecomunicaciones discurriera dentro de las normas comerciales acordadas y disponer de claridad en cuanto a que la base de las tasas de pago fuera congruente de un país a otro. El informe adoptado por el Grupo sobre Telecomunicaciones Básicas en febrero de 1997 había basado su decisión de aplicar una moratoria sobre la solución de diferencias en relación con las tasas de distribución en tres premisas. La primera era que el sistema de tasas de distribución era el método habitual de terminación del tráfico internacional. La segunda, que la naturaleza de dicho sistema implicaba tasas diferentes; y la tercera, que debería evitarse la

presentación de nuevas exenciones del trato NMF. Era necesario volver a examinar estas premisas originales en tanto que parte del examen de la moratoria. Con respecto a la primera premisa, el orador señaló que en la actualidad hasta la mitad de todo el tráfico tenía lugar al margen del sistema de tasas de distribución (por ejemplo, por Internet) o se encaminaba de forma que se explotara la ruta menos costosa entre dos puntos terminales. Con respecto a la segunda premisa, sostuvo que aunque el sistema de tasas de distribución implicaba tasas diferentes, ello no suponía que las medidas gubernamentales que las regulaban tuvieran que aplicarse discriminando entre los países de manera incompatible con el trato NMF. En vez de eso, cuando los gobiernos intervinieran en la fijación de las tasas deberían aplicar de manera coherente entre los países los factores subyacentes a la determinación de las tasas. Subrayó que esto no significaba que las tasas tuvieran que ser uniformes. Aunque podían ser diferentes, los factores tomados en consideración para su fijación deberían aplicarse de manera coherente a todos los países. Con respecto a la tercera premisa, declaró que la tendencia hacia la liberalización de los servicios internacionales de telecomunicaciones y el uso cada vez menor de las tasas de distribución brindaban condiciones propicias para la supresión de la moratoria. Todos los servicios de telecomunicaciones internacionales deberían considerarse servicios objeto de comercio, y los pagos internacionales en concepto de dichos servicios deberían estar sujetos a los principios del AGCS del trato NMF y de la transparencia.

29. A fin de aclarar más la postura de Australia, el orador abordó varias preguntas que se habían planteado en el pasado a su delegación.¹ En primer lugar, a veces se argumentaba que la supresión de la moratoria, y con ella la capacidad de que los Miembros tomaran medidas gubernamentales discriminatorias en relación con las tasas de distribución, causaría una pérdida de ingresos a los países en desarrollo. El orador declaró que las estadísticas indicaban con claridad que la proporción del tráfico internacional que recurría al sistema de tasas de distribución estaba disminuyendo, y que también lo estaba haciendo el nivel de las propias tasas, particularmente hacia el final de los años noventa. Por tanto, eran exageradas las afirmaciones acerca de posibles pérdidas de ingresos. En segundo lugar, a veces se argumentaba que debería dejarse a la UIT la cuestión de la reforma de las tasas de distribución. En opinión de Australia, aunque era legítima la jurisdicción de la UIT para examinar cuestiones sobre tasas de distribución, esa organización no tenía ni mandato ni capacidad en relación con los compromisos gubernamentales en materia de normas comerciales internacionales. Por tanto, cualquier cuestión relativa a medidas gubernamentales relacionadas con el comercio sobre pagos de telecomunicaciones debían abordarse a través del AGCS. El orador recalcó además que no había conflicto alguno entre las recomendaciones de la UIT sobre tasas de distribución y los principios del AGCS sobre el comercio de servicios. La Recomendación D 150 del Sector de Normalización de la UIT ("Principios Generales de Tarificación") ofrecía una amplia flexibilidad a los Miembros para aplicar cualquiera de los cinco diferentes sistemas de telefonía internacional de manera que se respetara el AGCS y su Anexo sobre Telecomunicaciones.

30. El representante de Cuba declaró que debería mantenerse la actual moratoria sobre tasas de distribución porque persistían las condiciones prevalecientes en el momento de la decisión original. Si bien habían aparecido nuevos servicios en el marco de la recomendación D 150 de la UIT, seguía existiendo el desequilibrio en materia de terminación de tráfico desde los países en desarrollo a los desarrollados, en detrimento de los ingresos de aquéllos. La cuestión debería seguir siendo analizada por la UIT.

31. El representante de las Comunidades Europeas declaró que era importante seguir reduciendo los costos de los servicios de telecomunicaciones. Compartió la opinión de otras delegaciones de que la moratoria no había expirado. A la larga desaparecería la cuestión de la aplicación de tasas de distribución por las autoridades públicas. Los temas que preocupaban a Australia podían perfectamente ser abordados en las actuales negociaciones.

¹ Distribuidas posteriormente como Job (01)/111.

32. El representante de México declaró que en la actualidad seguían existiendo las condiciones que originalmente habían dado lugar a la moratoria.

33. El representante de los Estados Unidos declaró que aunque su delegación no se oponía a la prórroga de la moratoria sobre las tasas de distribución, coincidía con Australia en que hacía falta seguir justificando su necesidad. Por lo menos, no estaba claro si en la actualidad estaba vigente la moratoria. Esa inseguridad no proporcionaba ni certidumbre jurídica ni un fundamento sólido para establecer una política nacional. Abrir los mercados a la competencia suprimiría cualquier justificación de autorizar tasas de distribución: donde la competencia fuera suficiente, las fuerzas del mercado fijarían las tasas más de acuerdo con los costos. De hecho, en los Estados Unidos una parte sustancial del tráfico internacional (más del 50 por ciento) se liquidaba en la actualidad al margen del sistema de tasas de distribución. Los Miembros que obstaculizaban la transición a tasas razonables de mercado aferrándose al sistema de tasas de distribución atrincherarían aún más en sus posiciones dominantes a las empresas titulares de los servicios, en detrimento de beneficios para el consumidor tales como el descenso de los precios y el mayor número de llamadas internacionales. Su delegación apoyó un llamamiento hecho con anterioridad por Australia para que se fijara una fecha límite para tomar una decisión sobre la reinstauración de la moratoria. A menos que los países interesados en restablecer la moratoria pudieran demostrar la clara necesidad de ésta, debería considerarse cerrada la cuestión y probado que no había necesidad de una moratoria.

34. El Presidente sugirió que el Consejo tomara nota de las declaraciones formuladas y volviera sobre este punto en la próxima reunión.

35. Así lo acordó el Consejo.

E. COMERCIO ELECTRÓNICO

36. El Presidente recordó que en la última reunión sólo se debatió muy brevemente el tema del comercio electrónico. En ese momento la mayoría de las delegaciones estimaron que querían primero asimilar un debate muy sustancial que había tenido lugar bajo los auspicios del Consejo General sobre esta cuestión. En ese debate, los Miembros habían convenido en que los órganos subsidiarios deberían proseguir su labor y rendir informe al Consejo General. Las delegaciones también habían abordado algunas cuestiones sectoriales en las que el Consejo de Servicios posiblemente pudiera seguir avanzando. Recordó que muchas de estas cuestiones ya habían sido debatidas en el Consejo de Servicios y que la situación de ese debate se recogía en el informe del Consejo al Consejo General (S/L/74).

37. El representante de las Comunidades Europeas declaró que en su comunicación (S/C/W/183) había sugerido que el Consejo se centrara en la clasificación y en la aplicación del Anexo sobre Telecomunicaciones y el documento de referencia. El orador quedaba a la espera de recibir observaciones sobre estas o cualesquiera otras cuestiones que las delegaciones desearan abordar en el marco del comercio electrónico.

38. La representante de Turquía declaró que aunque el comercio electrónico proporcionaba un acceso económico y rápido a los nuevos mercados, hacían falta ajustes legales que afectaban al entorno competitivo del comercio mundial. Esos ajustes debían proporcionar a los Miembros las mismas oportunidades para competir. La oradora también apoyó las opiniones recogidas en la comunicación de las Comunidades Europeas.

39. El representante del Uruguay, hablando en nombre del MERCOSUR, llamó la atención del Consejo sobre la comunicación del MERCOSUR al Consejo General (documento WT/GC/W/434). Basándose en los informes del Consejo de Servicios al Consejo General, la comunicación del MERCOSUR señalaba algunas cuestiones sectoriales sobre las que debería seguir trabajando el Consejo de Servicios.

40. El Presidente sugirió que el Consejo volviera sobre este punto en su próxima reunión.
41. Así lo acordó el Consejo.

F. EXAMEN TÉCNICO DEL AGCS

42. El Presidente recordó que en el curso del año pasado se consideró varias veces la cuestión de un examen técnico de las disposiciones del AGCS. En la última reunión había tenido lugar un intercambio de opiniones muy constructivo sobre una propuesta de las delegaciones de Australia, las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, Hong Kong, China, el Japón y Suiza (Job (01)/40) de incluir con regularidad el punto del examen técnico de las disposiciones del AGCS en el orden del día. El Presidente señaló que durante los debates muchas delegaciones habían apoyado en principio la idea de un examen técnico y que las delegaciones convinieron en que era necesario que cualquier examen preservara la actual estructura y principios del AGCS. Recordó que algunos Miembros estaban a favor de que el alcance y el calendario del examen estuvieran más estrechamente definidos. Llamó la atención del Consejo sobre un documento informal del Japón (Job (01)/107), que proponía sugerencias con respecto a posibles cuestiones a abordar en un examen técnico.

43. El representante del Japón declaró que había muchas cuestiones que se prestarían a consideración en un examen técnico. En su comunicación, el Japón se había centrado particularmente en el párrafo 2 del artículo XX del AGCS en tanto que posible punto de partida para un examen técnico. En opinión del Japón, era difícil distinguir si la limitación consignada en la columna del Acceso a los Mercados restringía las disciplinas sobre el trato nacional en los casos en que los compromisos estuvieran consignados en listas de conformidad con el párrafo 2 del artículo XX del AGCS. Esta dificultad podía socavar la claridad de las listas. Para aclarar esta cuestión, sugirió que los Miembros estudiaran aplicar el párrafo 18 de las directrices sobre consignación en listas a todos los compromisos específicos que se contraigan en el futuro. Esto podía hacerse o adoptando un entendimiento sobre la interpretación del párrafo 2 del artículo XX, o modificando dicho párrafo, o añadiendo el párrafo 18 a las directrices para el proceso de peticiones y ofertas. En el futuro, el Japón también desearía debatir determinadas ambigüedades relativas a la interpretación del artículo V.

44. El representante de Noruega declaró que cinco años después de haber entrado en vigor el AGCS parecía que determinadas disposiciones del Acuerdo posiblemente no eran todo lo claras que se había pretendido inicialmente. Además, se había cuestionado la coherencia jurídica de algunas disposiciones. Creía que el examen técnico de estas disposiciones contribuiría a aclarar algunas de las cuestiones. No obstante, sería prematuro presentar una lista exhaustiva definitiva de las cuestiones a examinar, pues conforme avanzaran las negociaciones objeto de mandato podrían surgir nuevas cuestiones que fueran objeto de la atención de los Miembros. Sugirió comenzar el examen técnico basándose en dos cuestiones expuestas en una nota documental de la Secretaría (Job (01)/17).

45. La representante de Hong Kong, China declaró que el avance del examen técnico debería basarse en las contribuciones de los Miembros. Las cuestiones señaladas por el Japón y la Secretaría podrían servir de punto de partida.

46. El representante de los Estados Unidos declaró que la escasez de cuestiones sugeridas para su examen no justificaba un examen técnico.

47. El representante de México declaró que los cinco años de experiencia en la aplicación de un acuerdo de la complejidad del AGCS habían sido demasiado poco para decidir si determinadas disposiciones de ese Acuerdo necesitaban cambios. Los problemas relacionados con el párrafo 2 del artículo XX podían abordarse en el contexto de contraer futuros compromisos, y las cuestiones relativas al alcance de los artículos XVI y XVII podían abordarse en los casos en que existieran problemas concretos en las listas de los Miembros. En todo caso, si hubiera que convenir un examen

técnico, habría que ponerse de acuerdo sobre un conjunto de temas y un calendario, y quizás también sobre plazos para el debate. El representante de México declaró además que no se había acordado multilateralmente colocar en el orden del día un punto titulado "Examen técnico del AGCS". Aunque reconocía que era necesaria la actual discusión, declaró que en el título de este punto debería haberse indicado con claridad que el examen técnico había sido solicitado o propuesto por un número limitado de delegaciones.

48. El representante del Uruguay, hablando en nombre del MERCOSUR, respaldó la puntualización de México acerca del título del punto del orden del día. Formalmente, el título debería haber sido "Petición de un examen técnico", junto con los nombres de los Miembros peticionarios. Si bien cualquier delegación podía presentar una propuesta, era importante indicarlo claramente en el orden del día de una reunión. Sobre el fondo de la cuestión, reiteró que un importante requisito previo para comenzar un examen técnico era una lista de cuestiones. El artículo V era una parte fundamental del AGCS y reflejaba un equilibrio muy delicado de derechos y obligaciones de los Miembros. Los miembros del MERCOSUR de ningún modo podían aceptar que el artículo V fuera abarcado por ningún examen técnico del AGCS.

49. El representante de Cuba respaldó las observaciones formuladas por México y el Uruguay.

50. El representante de Hungría apoyó la propuesta de realizar un examen técnico y también el punto de vista de que debería establecerse una lista de cuestiones a abordar en el examen. No obstante, tal lista debería permitir a los Miembros la posibilidad de plantear otras cuestiones de naturaleza técnica, a condición de que el Consejo del Comercio de Servicios acordara tomarlas en consideración en una etapa ulterior. No era necesario fijar una fecha límite para el examen. El orador respaldó que se examinaran las dos cuestiones que figuraban como ejemplos en la nota de la Secretaría (Job(01)/17), a saber, el solapamiento entre los artículos XVI y XVII y la relación entre los párrafos 1 y 2 del artículo XVI. También apoyó que se examinara el párrafo 2 del artículo XX; en cuanto al artículo V del AGCS, convino con el MERCOSUR en que esta cuestión no se prestaba a un examen técnico.

51. El representante de Suiza dio su apoyo al enfoque del Japón, esto es, ocuparse caso por caso de las cuestiones técnicas basándose en las comunicaciones de los Miembros. En lugar de elaborar un complejo programa de trabajo con un detallado calendario, era más pragmático ocuparse de los problemas técnicos a medida que surgieran y una vez que un Miembro presentara una propuesta. Propuso incluir en el examen una ambigüedad entre la definición de "proveedor de servicios" del apartado g) del artículo XXVIII del AGCS, donde ese término se definía como "toda persona que suministre un servicio" y el apartado 5 b) del Anexo sobre Servicios Financieros, que describía a un proveedor de servicios financieros como "toda persona física o jurídica de un Miembro que desee suministrar o que suministre servicios financieros".

52. El representante de Corea declaró que era necesario un examen técnico de las disposiciones del AGCS para mejorar la claridad jurídica global del Acuerdo. Apoyó las cuestiones sugeridas para examen en la comunicación del Japón y estimó que el proceso de presentación de cuestiones para su debate debería continuar caso por caso sobre la base de las comunicaciones por escrito.

53. La representante de las Comunidades Europeas declaró que la manera más provechosa de realizar un examen era proceder pragmáticamente caso por caso, comenzando por las cuestiones expuestas en la contribución del Japón, la nota de la Secretaría y la otra cuestión señalada por Suiza en la presente reunión. La oradora animó a los países que hubieran señalado otras cuestiones a presentar documentos donde se expusieran los problemas y se propusieran posibles maneras de resolverlos. Refiriéndose al punto formal planteado por México y el Uruguay, declaró que las conclusiones del Presidente en la última reunión indicaban claramente que el Consejo volvería sobre este punto en la presente reunión; de ahí que no hubiera motivo para modificar su título.

54. El representante de la República Dominicana declaró que el título del punto del orden del día podía dar la falsa impresión de que entre los Miembros había consenso sobre la cuestión de iniciar un examen técnico. Sugirió que los problemas técnicos se abordaran en el contexto del mecanismo de aplicación en el Consejo General. Las cuestiones técnicas que exigían modificaciones del AGCS eran comparables con cuestiones que surgían en otros acuerdos y para las cuales ciertos Miembros buscaban una solución.

55. El representante de Nueva Zelandia declaró que cualquier delegación podía inscribir cualquier punto en el orden del día del Consejo y que la suya participaría en cualquier punto inscrito en el orden del día. Respaldó el punto de vista de que todo examen técnico debería tratar de resolver cuestiones de carácter técnico y coincidió con otras delegaciones en que las cuestiones relativas al artículo V eran de naturaleza sustantiva.

56. El representante de Australia declaró que el actual proceso de negociación quedaría mejorado y fortalecido mediante la posibilidad de señalar aquellas disposiciones del AGCS que constituyeran una fuente de incertidumbre y que debería llegarse a un punto de vista común sobre la manera de entenderlas. El examen técnico debería avanzar paralelamente a las negociaciones. Aunque quizás el número total de cuestiones no fuera grande, algunas de ellas constituían una fuente notable de incertidumbre y adolecían de falta de claridad.

57. El representante de Singapur respaldó la opinión de que el examen debería realizarse basándose en las comunicaciones de los Miembros. Un posible calendario para el examen podría ser el calendario de las negociaciones. Al igual que otras delegaciones, la suya no creía que el artículo V fuera una cuestión técnica que se prestara a examen.

58. El representante de Kenya subrayó la importancia del artículo V y respaldó los comentarios de aquellas delegaciones que se mostraban críticas con su inclusión en un examen técnico.

59. El representante del Japón, en respuesta a una pregunta del Brasil, declaró que la referencia en el párrafo 4 del Job (01)/107 a "las directrices de procedimiento que han de adoptarse en el CCS para las negociaciones" estaba presagiando que una vez que las negociaciones sobre servicios entraran en la fase de peticiones y ofertas, el Consejo adoptaría una decisión sobre el procedimiento que orientara esas negociaciones. En opinión del Japón, una aclaración del párrafo 2 del artículo XX aclararía asimismo el contenido exacto de las ofertas de los Miembros sin dar lugar a ninguna disciplina jurídicamente vinculante. Empezar las negociaciones sobre la base de un entendimiento común de esta cuestión resultaba provechoso.

60. El representante de Malasia declaró que la anterior aprensión de su delegación a dar su acuerdo a un examen técnico se confirmaba por la propuesta del Japón de incluir en tal examen el artículo V. Examinar este artículo tenía implicaciones para toda la estructura del AGCS. Además, le preocupaba que se dejara abierto el calendario y el formato y la estructura del examen.

61. El representante de la Argentina declaró que los Miembros deberían tomar la precaución de no introducir cuestiones que no estuvieran suficientemente maduras, teniendo en cuenta el poco tiempo que llevaba existiendo el AGCS. Era necesario definir con mucha precisión el alcance de un examen técnico. Debería estar claro que cualquier examen técnico debería producir una mayor claridad técnica y eliminar ambigüedades, pero no alterar la sustancia de los compromisos contraídos. Al formular propuestas, los Miembros deberían indicar la repercusión práctica de las cuestiones técnicas señaladas. Sobre la cuestión planteada por Suiza, creía que la definición no adolecía de falta de claridad.

62. El representante del Canadá declaró que el debate había mostrado que establecer un programa concreto para un examen planteaba dificultades. El orador prefería continuar el examen de cualquier cuestión basándose en las comunicaciones de los Miembros.

63. El representante de Indonesia declaró que debería haber una noción definida y acordada de la lista de cuestiones y no comenzar un ejercicio de carácter abierto. Era necesario fijar un calendario para el examen.

64. El Presidente concluyó que si bien no todos los Miembros estaban persuadidos de la necesidad de un examen, ninguno se había opuesto radicalmente a él. Parecía haber un consenso en que el objetivo global de cualquier examen debería ser mejorar la certidumbre jurídica y la claridad del Acuerdo, sin modificar su estructura ni sus principios. Declaró que las delegaciones reconocían que todo Miembro tenía el derecho a llamar la atención del Consejo sobre cualquier tema que considerara apropiado. Sugirió que en el futuro se inscribiera el presente punto en el orden del día con el título "Propuestas relativas a un examen técnico de las disposiciones del AGCS". El Presidente señaló que algunas delegaciones quisieran contar con una lista definitiva de cuestiones y un calendario para el examen técnico, mientras que otras creían que sería más productivo tratar las cuestiones a medida que surgieran basándose en las comunicaciones de los Miembros. Sugirió que el Consejo volviera sobre este asunto en su próxima reunión y debatiera en sustancia las diversas disposiciones que se habían presentado hasta la fecha para su examen técnico. El debate de fondo podía tener lugar punto por punto, abordando las cuestiones siguientes: i) párrafo 2 del artículo XX; ii) artículos XVI – XVII; iii) párrafos 1 y 2 del artículo XVI y iv) apartado g) del artículo XXVIII, junto con el párrafo 5 b) del Anexo sobre Servicios Financieros.

65. Así lo acordó el Consejo.

G. OTROS ASUNTOS

66. El representante del Panamá declaró que a su delegación le preocupaba ver que algunos Miembros de la OMC habían adoptado o tenían la intención de adoptar, en su legislación tributaria, medidas discriminatorias que afectaban a los servicios y los proveedores de servicios del Panamá. Este tema había llegado a ser conocido comúnmente como el problema de las "listas negras financieras".

67. Algunas de estas medidas o intenciones parecían basarse en estudios que fueron elaborados en 1998 y 2000 por el Comité de Asuntos Fiscales de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) en el contexto del denominado programa sobre "competencia tributaria dañina". Señaló que otras medidas que ya habían sido aplicadas con efectos negativos en el comercio de servicios del Panamá bien pudieran tener su propia justificación. En uno y otro caso, las medidas estudiadas o que se estaban aplicando tenían un efecto en las transacciones con países que estos países clasificaban como paraísos fiscales o jurisdicciones con bajos niveles de tributación; el orador recalcó que estas medidas infringían las obligaciones de los Miembros en el marco del AGCS.

68. Entre los países que estaban estudiando o aplicando estas medidas prevalecía la opinión de que la competitividad del sistema de recaudación tributaria del Panamá afectaba a su propia recaudación de impuestos y repercutía en la asignación de capital a nivel internacional. En realidad, las medidas se aplicaban como reacción a la competitividad del Panamá gracias a unos niveles más bajos de imposición a los que se etiquetaba como prácticas fiscales dañinas.

69. El representante del Panamá subrayó que ninguna de las características calificadas como prácticas fiscales dañinas eran aplicables al régimen impositivo panameño, que era progresivo, moderno y transparente y fijaba los tipos porcentuales a niveles coherentes con los habitualmente aplicados a escala internacional. A diferencia de los sistemas de algunas de las jurisdicciones que

imponían o estudiaban imponer medidas en este caso, el sistema panameño no discriminaba a favor de los extranjeros y los no residentes en detrimento de los residentes nacionales.

70. Además, el Panamá aplicaba un sistema adelantado de asistencia jurídica mutua para el intercambio de información con otros Estados y contaba con excelentes antecedentes de cooperación en esa esfera. Si las medidas aplicadas fueran en su diseño coherentes con el principio básico de la nación más favorecida, según se recogía en el AGCS, su aplicación en el caso del Panamá sería injusta. Independientemente de toda abstracción de injusticia, la medida propuesta por la OCDE y las aplicadas en la actualidad por algunos Miembros de la OMC infringían, en opinión de su delegación, el AGCS.

71. Las medidas en cuestión eran o serían aplicadas con el objetivo de obtener ingresos por recaudación de impuestos y en particular ingresos en el extranjero procedentes de algunos contribuyentes que no declaraban en la jurisdicción donde se aplicaban las medidas. El efecto de éstas era privar de beneficios a los proveedores de servicios panameños y que las transacciones eran más complicadas y difíciles; como consecuencia, se reducía la competitividad de los proveedores panameños, se desalentaban las inversiones, etc. Todo ello se hacía discriminando e infringiendo el principio del trato NMF.

72. La excepción general contemplada en el AGCS no era pertinente para estos tipos de medidas que estaba denunciando su delegación. Las excepciones contempladas en los apartados d) y e) del artículo XIV se referían al régimen impositivo y permitían el trato diferente sólo en dos casos: uno, cuando la diferencia de trato tuviera por objeto garantizar la imposición o la recaudación equitativa o efectiva de impuestos directos respecto de los servicios o proveedores de servicios de otros Miembros; dos, cuando la diferencia de trato resultara de un acuerdo destinado a evitar la doble imposición o de las disposiciones destinadas a evitar la doble imposición contenidas en cualquier otro acuerdo o convenio internacional que fuera vinculante para el Miembro.

73. La segunda excepción no era aplicable, porque las medidas no se aplicaban sobre la base de ningún acuerdo destinado a evitar la doble imposición. En lugar de eso, el objeto de las medidas era recuperar pérdidas debidas a la evasión de impuestos de los países por los contribuyentes, fueran nacionales o residentes, con propósitos fiscales.

74. La primera excepción tampoco se aplicaba, pues su uso se limitaba a la imposición o recaudación de impuestos directos respecto de los servicios o proveedores de servicios de otros Miembros. Costaba imaginar cómo el régimen impositivo del Panamá podía tener un efecto sobre la capacidad de otras jurisdicciones de imponer y recaudar impuestos a servicios o proveedores panameños que exigieran la aplicación de medidas discriminatorias, medidas distintas a las utilizadas en los casos de otros proveedores de otra nacionalidad.

75. El orador concluyó que su delegación se había puesto en contacto con las de algunos de los países en cuestión, esto es, México, la Argentina, Venezuela y otros, para tratar de estas preocupaciones. Esperaba que futuras conversaciones contribuyeran a evitar la discriminación y desembocaran en la eliminación completa de las actuales medidas discriminatorias.

76. El representante del Brasil sugirió buscar otra fecha para el examen del Anexo sobre Servicios de Transporte Aéreo, previsto para octubre de 2001, puesto que esta reunión coincidía con la de la 33ª Asamblea de la OACI.

77. El Presidente sugirió basarse en las indicaciones de las delegaciones para fijar una nueva fecha para la reunión sobre el Examen del Anexo sobre Servicios de Transporte Aéreo.